

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°033

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **ANA DILIA CATAÑO DE GONZALEZ** contra **PORVENIR S.A.** y **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se declare que reúne las exigencias establecidas en la sentencia SU-062-2010 y, en consecuencia, puede trasladarse del RAIS al RPM en cualquier momento conservando los beneficios del régimen de transición pensional.

En subsidio, solicita que se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS y se condene a **Porvenir S.A.** a trasladar a **Colpensiones** todos los aportes realizados con sus respectivos rendimientos financieros, frutos e intereses y el valor descontando por concepto de garantía de pensión mínima, gastos de administración, prima de reaseguros del Fogafín y primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes debidamente indexados.

Respecto de **Colpensiones**, solicitó que se le ordene recibir los valores trasladados contabilizándolos como semanas cotizadas y proceder a reconocer y pagar la pensión de vejez desde la fecha en que cumplió los requisitos y los respectivos intereses moratorios o en subsidio la indexación.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que nació el **29 de noviembre de 1955** y fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** desde el mes de junio de 1982.

En el mes de junio de 2002, se trasladó al RAIS administrado por **Porvenir S.A.**, sin que al momento del traslado se le brindara una asesoría personalizada, técnica, mínima y suficiente.

Respuesta Colpensiones

Colpensiones a través de apoderado indicó que es cierto que la actora fue su afiliada y se trasladó al RAIS, sin que conozca los pormenores de esa vinculación.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: imposibilidad jurídica de declarar la ineficacia del traslado de régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de vejez, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses moratorios, prescripción, compensación, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

Respuesta Porvenir S.A.

Porvenir S.A. a través de apoderado admitió que la demandante suscribió formulario de vinculación a esa administradora desde el **26 de abril de 2002**, indicando que su traslado al RAIS fue producto de una decisión libre de presiones o engaños.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

Sentencia de primera instancia

La Juez Doce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia **22 de noviembre de 2022**, declaró la ineficacia de la afiliación al RAIS, indicando que la actora

se encuentra afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado por **Colpensiones**.

Como consecuencia de lo anterior, **condenó a Porvenir S.A.**, a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, traslade a Colpensiones, el valor de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexado con cargo a sus propios recursos.

Así mismo, dispuso, que, al momento de cumplir la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

Ordenó a **Colpensiones** recibir los valores mencionados e integrarlos al fondo común que administra, y que, las semanas acreditadas por las AFP se reflejen en la historia laboral del actor.

Finalmente, en lo que respecta a la pretensión encaminada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, se abstuvo de pronunciarse remitiéndola a los jueces de contencioso administrativo, por advertir su falta de jurisdicción, atendiendo a la condición de empleada pública que en la actualidad ostenta la demandante.

Esta decisión fue recurrida por los apoderados del demandante y **Porvenir S.A.** en los siguientes términos:

Recurso demandante

El recurrente solicita que se **revoque parcialmente** de la decisión de primera instancia en cuanto declaró la falta de jurisdicción para conocer de la pretensión encaminada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, toda vez que, la demandante tiene la calidad de trabajadora oficial, además debe permitirse a **Colpensiones** a pronunciarse en primera oportunidad respecto de la pretensión pensional, sin que sea necesaria acudir a la jurisdicción.

Recurso Porvenir S.A.

El recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia en cuanto ordenó el traslado de los gastos de administración debidamente

indexados, por cuanto esta orden resulta incompatible con los rendimientos que fueron generados por el ahorro de la afiliada.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, el apoderado de **Porvenir S.A.** solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, toda vez que, el actor no demostró la existencia de algún vicio que invalidara el consentimiento entregado al momento de suscribir el formulario de afiliación.

Del mismo modo resalta que existen en el proceso elementos que debieron ser objeto de valoración por parte del juez a-quo, como la garantía de los derechos de retracto y libre escogencia, además de que cumplió con la carga de probar bajo el estándar que le era exigible para el momento de la vinculación del demandante, sin que posteriores criterios le puedan ser oponibles.

Por último, solicitó que en el evento que se mantenga la decisión de primera instancia, se le permita mantener lo cobrado por gastos de administración a título de restituciones mutuas.

Por su parte, el apoderado de la parte demandante solicitó que se **confirme** la decisión de primera instancia en lo referente a la declaratoria de ineficacia y sus efectos y solicita que se imponga a la administradora del RAIS el pago de perjuicios consistentes en el reconocimiento de la mesada pensional por 3 años.

Finalmente, la apoderada de **Colpensiones** señaló que la demandante no demostró la existencia de algún vicio en su consentimiento, por lo que al existir una voluntad libre y sin presiones debe tenerse como válido su traslado al RAIS, anotando por lo demás que admitir que se realice un cambio de régimen pensional de una persona que ya cumplió la edad pensional implica una grave afectación para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen del demandante resulta o no eficaz, (ii) establecer cuáles son las consecuencias

jurídicas de la declaratoria de ineficacia, (iii) revisar si operó la prescripción, (iv) determinar si la jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer de la pretensión de pensión de vejez solicitada por la demandante y (v) dilucidar si la apelación frente a la sentencia es el momento procesal para presentar la inconformidad respecto de la fijación de las agencias en derecho.

De conformidad con el artículo 66ª del CPT, esta Sala solo se pronunciará sobre los aspectos que fueron motivo de sustentación en el recurso de apelación, sin que cuente con competencia para pronunciarse respecto de nuevas pretensiones como la indemnizatoria presentada por el apoderado de la demandante en sus alegatos de conclusión, debiendo recordar en este punto que esta etapa procesal no permite proponer nuevas solicitudes o desbordar los argumentos en que se fundamentó la alzada¹.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **Ana Dilia Cataño de González** nació el **29 de noviembre de 1955** (01/pág.100).
2. La señora **Cataño de González** fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** el día **7 de junio de 1982** (02/pág.16).
3. El día **26 de abril de 2002**, la actora suscribió formulario de traslado al RAIS a través de la AFP **Porvenir S.A.** (17/pág.65), traslado que se hizo efectivo el 1 de junio de 2002 (17/pág.63).
4. Según los certifica **Metrosalud**, la actora fue nombrada mediante **Resolución N°935 del 16 de octubre de 2007**, para ocupar el cargo de Auxiliar del área de la salud (enfermería) (01/pág.40).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

¹ En este sentido se indicó en la sentencia SL-3144-2021, lo siguiente: “En todo caso, no debe olvidarse que los alegatos de conclusión son un informe que presentan los litigantes sobre el análisis de los hechos a la luz de las pruebas producidas para defender sus posturas procesales y los hechos y pretensiones incluidos en la demanda, en la contestación, en la reconvención, en las excepciones, y en la sustentación de los recursos, con el fin de «apoyar la veracidad de los hechos narrados concordándolos con los hechos probados, de manera que en las mismas no se pueden proponer nuevas pretensiones, como tampoco incluir hechos nuevos ni desbordar las materias objeto de los recursos, y para el caso de las apelaciones, incluyen además el desarrollo de los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia» (CSJ SL4397-2015 y CSJ SL2136-2014).”

El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL4426 de 2019, SL2611 de 2020, SL2877 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL-755-2022.

En las providencias citadas el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, segundo momento, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS a través de **Porvenir S.A.** se realizó el día **26 de abril de 2002** (17/pág.65), lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual la jurisprudencia en interpretación del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 ha exigido la demostración por parte de las administradoras de pensiones del cumplimiento del deber entregar una información necesaria y transparente, conceptos que se explican en la sentencia SL-1452-2019 de la siguiente forma:

Información necesaria: consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Transparencia: La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Porvenir S.A.** al dar respuesta a la demanda manifestó que la decisión de la actora fue voluntaria y libre de vicios, aspecto que no resulta relevante si se tiene en cuenta que su carga procesal era de la de demostrar cual fue la información entregada al afiliado, para a partir del conocimiento de la misma, establecer si cumplió con los parámetros de información que le eran exigibles².

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que al no demostrar **Porvenir S.A.** que cumpliera con su deber de informar al momento de la vinculación al RAIS, la consecuencia es que la afiliación efectuada a este fondo devenga ineficaz de

² Sentencias SL-4426-2019, SL-782 de 2021 y SL-1743 de 2021.

conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por lo que se **confirmará** el fallo de primera instancia.

De los efectos de la ineficacia

La Juez de primera instancia como consecuencia de la declaratoria de ineficacia condenó a la administradora del RAIS trasladar todos aquellos conceptos que recibió con motivo de la afiliación del demandante incluido lo cobrado por gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexado con cargo a sus propios recursos.

Esta decisión es debatida de forma parcial por el apoderado de **Porvenir S.A.** quien cuestiona la condena al traslado de los gastos de administración debidamente indexados, toda vez que la entidad realizó una gestión que produjo unos rendimientos financieros que superan con creces estos valores.

Con el fin de dar respuesta a este cuestionamiento y de paso resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor a **Colpensiones**, es relevante recordar que en este caso se está aplicando la ineficacia como respuesta jurídica del ordenamiento jurídico por la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto.

En ese orden, es importante hacer énfasis en lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que: la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.

Siguiendo esta enseñanza la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que las AFP que se beneficiaron de ello trasladen a **Colpensiones**, todos los conceptos que recibieron.

La forma en que se debe interpretar el artículo 1746 del Código Civil, es bien explicada en la sentencia SL-2877-2020, en la que al respecto se expresó:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

En virtud de lo expuesto, para la Sala es claro que durante el periodo en que el actor estuvo vinculado al RAIS, se privó a **Colpensiones** del cobro de los gastos de administración en su favor, y en ese orden el restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública, por lo que precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto que no fue recibido como consecuencia del acto declarado ineficaz.

Ahora debe recordarse que la vuelta al estado inicial según lo explicado por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, implica la devolución de los siguientes conceptos recibidos por las AFP del RAIS:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM³.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte

³Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador⁴.

3. Los **gastos de administración**⁵, concepto consagra en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales, primas de seguros del Fogafín y la comisión correspondiente a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a **Colpensiones**, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁶, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones⁷.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016⁸.

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que le asistió razón a la juez de primera instancia en cuanto a las condenas impuestas, motivo por el cual se **confirmará** la decisión de primera instancia, **adicionándola** para precisar que lo trasladado por concepto de gastos de administración deberá contener lo pagado por primas de seguros del Fogafín debidamente indexado.

⁴Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

⁵Se deben asumir por el fondo de pensiones con cargo en su propio patrimonio y de forma indexada. En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

⁶Sentencia SL-4360-2019.

⁷Sentencia SL-2877-2020.

⁸En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL 2877-2020, CSJ SL-936-2021, CSJ SL-938-2021, CSJ SL-1410-2021CSJ y SL1442-2021.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688 de 2019, SL- 3202 de 2021 y SL 3199 de 2021.

De la competencia para conocer de la pensión de vejez de los empleados públicos

Manifiesta el apoderado recurrente que la juez de primera instancia contaba con competencia para conocer de la pretensión pensional respecto de **Colpensiones**, por cuanto se trata de una trabajadora oficial.

Para responder al recurso, es necesario tener en cuenta que la entidad a la que se encuentra vinculada la demandante es una ESE, entidad cuyos empleados según lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 ostentan la calidad de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990.

A su vez el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, establece que quienes prestan sus servicios a estas entidades son empleados públicos y por excepción, ostentan la condición de trabajadores oficiales cuando desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones.

En el caso de la demandante, se observa en el certificado laboral emitido por **Metrosalud**, que su vinculación se realizó mediante un acto administrativo, para desempeñarse en un cargo de carrera en provisionalidad y que sus labores son como Auxiliar del área de la salud (enfermería) (01/pág.40), hechos que implican que siendo la demandante una empleada que cumple un objeto misional de una ESE y tiene una vinculación legal y reglamentaria con la misma su condición sea la de empleada pública.

Sobre este aspecto es importante mencionar la sentencia SL-1270-2017 en la que la Corte Suprema de Justicia, recordó que aquellas controversias de los empleados públicos, son competencia de la jurisdicción contenciosa. En palabras del Alto Tribunal:

Y aun cuando a continuación asentó que la eventual relación suscitada entre las partes, no se originó en un contrato de trabajo, sino en una relación legal y reglamentaria, cuyo conocimiento era de la jurisdicción contencioso administrativo, no por ello incurrió en los dislates interpretativos que se reprocha en el cargo, en la medida que las relaciones de dependencia y subordinación, no pueden todas asimilarse a un contrato de trabajo, por cuanto existen otras modalidades de vinculación, como la señalada en la sentencia cuestionada, que bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, deben someterse a esa jurisdicción.

Siguiendo los anteriores lineamientos y teniendo en cuenta que la actora tiene la condición de empleada pública es indudable que su pretensión pensional al presentarse frente a una administradora pública debe ser conocida por los jueces de lo contencioso administrativo, por así disponerlo el numeral 4) del artículo 104 del CPACA⁹, por lo que carece aptitud legal la jurisdicción ordinaria laboral para resolver sobre la misma.

En este sentido es importante hacer mención de lo indicado por la Corte Constitucional en Auto 314-2021, en el que resolvió respecto de un conflicto de jurisdicciones en interpretación del numeral el numeral 4) del artículo 104 del CPACA, oportunidad en la que fijó la siguiente regla:

En suma, respecto de la competencia para resolver las controversias relacionadas con la seguridad social de los servidores del Estado, se prevén dos reglas. Una especial, que exige la acreditación de dos factores concurrentes para asignar el conocimiento del asunto a la jurisdicción contencioso administrativa. Estos son: la calidad de empleado público del demandante y que una persona de derecho público administre el régimen que le aplica. Asimismo, una residual según la cual, cuando la controversia involucra a un trabajador oficial, la competencia radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

Ahora, dada la falta de “*jurisdicción*” para conocer de lo pretendido, lo procedente es ordenar la remisión del expediente a los funcionarios competentes por así disponerlo el artículo 138 del CGP¹⁰, por lo que en este

⁹“4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”.

¹⁰“Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.”

punto fue acertada la decisión del juez a-quo, por cuanto desconocer en este caso las normas de competencia implicaría incurrir en causal de nulidad de lo actuado, por lo que en este aspecto motivo de inconformidad se **confirmará** la decisión apelada.

De la oportunidad para discutir el valor de las agencias en derecho

El apoderado de la parte demandante exteriorizo su inconformidad frente al valor fijado por la primera instancia por concepto de agencias, manifestación respecto de la cual debe recordar la Sala que el recurso de apelación contra la sentencia no es el momento procesal para exponer este descontento, toda vez que siguiendo lo enseñado por el artículo 366 del Código General del Proceso, el mismo debe presentarse una vez liquidadas las expensas y gastos del proceso mediante los recursos de reposición y apelación.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por la Juez Doce Laboral del Circuito de Medellín, el día **22 de noviembre de 2022**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **ANA DILIA CATAÑO DE GONZALEZ** contra **PORVENIR S.A.** y **COLPENSIONES**, **ADICIONÁNDOLA** para precisar que lo trasladado por concepto de gastos de administración deberá contener lo pagado por primas de seguros del Fogafín debidamente indexado.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Radicado 05001-31-05-012-2020-00255-01
Radicado Interno: P3612223
Asunto: Confirma y adiciona sentencia

LOS MAGISTRADOS


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado 05001-31-05-012-2020-00255-01
Radicado Interno: P3612223
Asunto: Confirma y adiciona sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Ana Dilia Cataño de González
Demandado (s)	Porvenir S.A. y Colpensiones
Radicado	05001-31-05-012-2020-00255-01
Decisión	Confirma y adiciona sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 1 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 1 de marzo de 2023 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO